JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C. Febrero once de dos mil veintiuno.

**Ref: tutela No. 2020- 744 de JUAN CARLOS PABON CUBIDES
contra CORPORACION NUESTRA IPS.**

Segunda Instancia

Procede el Despacho en esta instancia a decidir la impugnación que formuló la parte accionante, contra el fallo de tutela de diciembre 14 de 2020, proferido por el Juzgado 29 Civil Municipal de esta ciudad, dentro de la **ACCION DE TUTELA** arriba referenciada.

1°. ANTECEDENTES.

Pretende la accionante obtener la protección de los derechos fundamentales a **al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna.**

El aquí accionante en síntesis arguye como fundamentos de la pretensión: que no tiene ningún vinculo laboral ni contractual que le genere ingresos que le garantice sus sustento y el de su núcleo familiar. Dice que se encontraba vinculado laboralmente con la Corporación Nuestra IPS mediante un contrato de trabajo con la referida IPS, desde el 05 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2020, dicha terminación de contrato se sustenta en el acuerdo de terminación de contrato y transacción firmado por las partes, el cual se acordó y firmó, teniendo como base la promesa de pago oportuna indicada por dicha Corporación. Que la relación laboral anteriormente mencionada, no solo se ha incumplido con el pago de la liquidación de prestaciones sociales, sino se han derivado otra serie de incumplimientos. Que al día de la presentación de la tutela, la IPS accionada no ha cumplido con sus obligaciones de pago de los respectivos aportes legales que exige la ley, esto en cuanto a salud, vacaciones, primas, pensiones y cesantías.

Solicita que a través de este mecanismo se amparen sus derechos fundamentales ya indicados y que están siendo conculcados por la accionada.

Por haber correspondido el conocimiento de la tutela al Juzgado 29 Civil Municipal de esta ciudad, previo reparto, fue admitida mediante providencia de Noviembre 30 de 2020, donde se dispuso oficiar a la parte accionada para que, se pronunciara sobre los hechos materia de la tutela y se vinculó al Ministerio de Trabajo, a Compensar Eps y a Porvenir.

El extremo pasivo, hizo uso del derecho de defensa dando respuesta a la petición de tutela y exponiendo los motivos que la sustentan así:

Porvenir

Señala en su respuesta que el señor JUAN CARLOS PABON, no ha presentado ninguna solicitud en Porvenir S.A. y que la pretensión del accionante referente al pago de las prestaciones a las que tiene derecho, se encuentran a cargo de la CORPORACION NUESTRA IPS. Que dicha corporación respecto del afiliado se encuentra en mora de los aportes a pensión de los periodos de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, por lo cual se iniciaron los procesos de cobro en contra de la entidad. Por lo que la entidad que debe resolver la solicitud del actor es la CORPORACION NUESTRA.

Dice que no hay legitimación en la causa por pasiva y solicita se declare la improcedencia de la tutela frente a Porvenir.

Ministerio de Trabajo

Solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela en referencia contra el Ministerio del Trabajo, por falta de legitimación por pasiva, toda vez que esa Entidad no es ni fue la empleadora del accionante, lo que implica que no existe ni existió un vínculo de carácter laboral entre el demandante y la Entidad, y por lo mismo, no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre los dos, lo que da lugar a que haya ausencia por parte del Ministerio, bien sea por acción u omisión, de vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno.

Corporación Nuestra Ips

No dio respuesta a esta acción constitucional.

El Juzgado 29 Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia de diciembre 14 de 2020 negó el amparo solicitado, siendo impugnado el fallo por el accionante.

2°. CONSIDERACIONES DE SEGUNDO GRADO.

La Constitución Nacional en su artículo 86 estableció la acción de tutela, a fin de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.-

El artículo 13 de nuestra Constitución preceptúa que: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se considera que, la discriminación se reflejaría en el trato dado a determinada persona, y desequilibrado en cuanto a libertades y oportunidades respecto de las demás.

Sobre lo pedido en tutela, la Corte Constitucional ha definido el mínimo vital como aquella porción del ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, etc. “Por ello, la misma jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo vital no sólo comprende un componente cuantitativo, la simple subsistencia, sino también uno cualitativo, relacionado con el respecto a la dignidad humana como valor fundamental del ordenamiento constitucional” Así, se tiene que la falta absoluta de este ingreso básico sitúa al ciudadano en una circunstancia excepcional, la cual no da espera a que se agote un largo proceso laboral ante la inminencia de un perjuicio irremediable, entendido como la imposibilidad manifiesta de cubrir sus necesidades mínimas y las de su núcleo familiar dependiente.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha advertido que el mínimo vital se presume afectado, cuando: “(...) la suspensión en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una situación económica crítica que afecta sus derechos fundamentales y hace necesaria la intervención rápida y eficaz del juez de tutela para

restablecer su goce, correspondiéndole al demandado la demostración de que el peticionario de la tutela cuenta con otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender necesidades primarias y las de sus familias”.

Con respecto a la Seguridad Social, el artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotación: *i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado*¹.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos”⁶²¹.

Según ha sido interpretado por la alta Corporación, los objetivos de la seguridad social guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho *“como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político”⁶³¹.*

De lo pedido en tutela, de las respuestas dadas, el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse, ya que en efecto la tutela no fue instituida para fines económicos ni patrimoniales, teniendo el accionante otro medio al cual acudir, ya que no es por vía de tutela que deba ordenarse el pago de la liquidación de prestaciones sociales, cesantías, aportes pensionales, ni aportes a salud, como tampoco los Salarios dejados de percibir ni el pago de la Prima de servicios, ni de Vacaciones, ya que estas peticiones las

debe hacer en otro escenario y no en el constitucional, ya que se estaría invadiendo otras competencias.

No es dable acceder al amparo impetrado en este caso, por cuanto el accionante no agoto todos los medios que a su alcance estaban ya que El agotamiento de los medios de defensa disponibles como requisito previo, responde por ende, al *principio de subsidiariedad* de la tutela, que impide que el juez constitucional entre a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que la ley le autoriza, especialmente si los mecanismos para solucionar las posibles deficiencias en los procesos no han sido utilizados por las partes de acuerdo a las competencias que les asigna la ley.

Pues el accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria a efecto de solicitar los pagos a los cuales refiere la tutela.

Por estas razones es que el fallo que en via de impugnación se ha estudiado debe confirmarse ya que no amerita revocatoria ni nulidad alguna.

3°.- CONCLUSIÓN.

Con sustento en lo anteriormente considerado y razonado, se confirmara el fallo materia de impugnación, mediante el cual se nego la tutela.-

4°.- DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 29 Civil Municipal de Bogotá, de fecha diciembre 14 de de 2020.

Segundo: Notifíquesele a las partes este fallo por el medio más expedito.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
La Juez.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 027 DE CIRCUITO CIVIL ESCRITURAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA
D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9f8873e268261e07caa88f1ae488947b06e60b976d2cb35836eab4c5e231b1fa**

Documento generado en 11/02/2021 09:15:07 AM